

3

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

PROMOVENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

ESCRITO INICIAL DE DEMANDA

C.C. MINISTRAS Y MINISTROS INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

P R E S E N T E S

Sergio Cadena Martínez en mi carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, personería que acredito con el nombramiento de fecha 8 de agosto del 2020 que se anexa, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el inmueble ubicado en calle Benjamín Franklin número 84, en la colonia Escandón,, demarcación territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11800, en la Ciudad de México, y designando como delegados en los términos más amplios que prevé el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), a los C.C. Licenciados en Derecho; Ante Ustedes, respetuosamente, comparezco y expongo:

Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso f), de la fracción II, del artículo 105, de la CPEUM, y estando dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el precepto constitucional en cita, así como en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, promuevo demanda de:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Del mismo modo, quien suscribe el presente documento con certificado digital, autorizo tanto a mi persona como a la que se refiere a continuación, **para consultar el expediente electrónico:** con CURP:

Asimismo, solicito que, en virtud de que la oficialía de partes de este partido político cuenta con guardias y medidas de seguridad sanitarias, en adelante TODAS las notificaciones que sean realizadas a esta parte actora, se hagan por **oficio** en el domicilio señalado en esta demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, y **NO se realice ninguna notificación a través de los medios electrónicos.**

Dicho lo anterior, promuevo la demanda de Acción de Inconstitucionalidad en los siguientes terminos:

REQUISITO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CPEUM

En estricto apego a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, se señala:

- I. **Nombre y firma del promovente:** Ha quedado precisado al rubro de la presente demanda, firmando mediante el certificado digital *FIEL*, expedido a mi favor por el Sistema de Administración Tributaria.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

2022 SEP 19 PM 08:28
CERCA DE LA NACIÓN

II. Los órganos que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

- a) **Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Veracruz, LXVI Legislatura**, con domicilio en Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P. 91170 en Xalapa, Veracruz, México; y
- b) **Ayuntamientos** del Estado de Veracruz que participaron en la aprobación del Decreto impugnado.
- c) **Órgano Ejecutivo: Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave**, con domicilio en Palacio de Gobierno, Av. Enríquez s/n., Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México, y **Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave**, con domicilio en Palacio de Gobierno, Av. Enríquez s/n., Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México.

III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó: El **Decreto 240** por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave el **11 de agosto de 2022**, así como los artículos Transitorios del mismo Decreto.

IV. Preceptos del parámetro de regularidad constitucional que se estiman violados: El Decreto impugnado es violatorio de los artículos 14, 16, 30, 34, 73, 116, 124, 133 y 135 de la CPEUM. En concreto contraviene las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, así como los principios de supremacía constitucional, rigidez y deliberación parlamentaria, resultantes de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo segundo, 124, 133 y 135 de la Constitución Federal. Asimismo, viola los requisitos de elegibilidad previstos para el cargo de Gobernador del Estado en el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto por el diverso artículo 30, inciso A). Finalmente contraviene los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica, tutelados por los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los preceptos señalados previamente.

Previo a la manifestación de los correspondientes conceptos de invalidez, se considera oportuno manifestarse respecto a lo siguiente:

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DEMANDA

El plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad, según el artículo 60 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, es de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Es el caso que la presente demanda se interpone en tiempo y forma, habida cuenta que la norma general cuya invalidez se reclama, consistente en el **Decreto 240** por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave el **11 de agosto de 2022**, así como los artículos Transitorios del mismo Decreto, de ahí que **el plazo para su presentación transcurrió del 12 de agosto de 2022 al 10 de septiembre de 2022.**

Ello tomando en cuenta que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y I del Artículo 105 de la CPEUM, establece que el plazo para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad es de **treinta días naturales**, contados a partir del siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.

Por lo anterior, la presentación de esta demanda de acción de inconstitucionalidad es oportuna.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

La fracción II, inciso f), del artículo 105 de la CPEUM establece que la acción de inconstitucionalidad podrá ejercitarse por:

"Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

...

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

...

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;

..."

La acción de inconstitucionalidad procede contra leyes electorales federales o locales y, en el caso, si bien la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Constitución local), no es una Ley Electoral, desde el punto de vista formal, la adición de la fracción III al artículo 11 de la misma que se reclama, materialmente sí lo es.

Ello es así, porque dicho Decreto establece lo siguiente:

D E C R E T O NÚMERO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ARTÍCULO ÚNICO. – Se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a II. ...

III. Las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

DADO EN LA SALA DE SESIONES "VENUSTIANO CARRANZA" DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA LXVI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE

DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

ARIANNA GUADALUPE ÁNGELES AGUIRRE

DIPUTADA

SECRETARIA RÚBRICA.

Reforma que se aprecia de mejor manera en el cuadro siguiente:

Texto anterior	Texto vigente (reformado)
<p>Artículo 11. Son veracruzanos:</p> <p>I. Los nacidos en el territorio del Estado; y (REFORMADA, G.O. 20 DE JUNIO DE 2014)</p> <p>II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.</p> <p>(III. Sin correlativo).</p>	<p>Artículo 11. Son veracruzanos:</p> <p>I. Los nacidos en el territorio del Estado; y (REFORMADA, G.O. 20 DE JUNIO DE 2014)</p> <p>II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.</p> <p>III. Las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano.</p>

De lo anterior, se aprecia que la reforma constitucional reconoce que son veracruzanos las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano.

Por su parte, el artículo 14 de la Constitución local, establece que:

Artículo 14. Son ciudadanos los mexicanos por nacimiento o por naturalización, que tengan 18 años de edad, un modo honesto de vivir y que sean veracruzanos o vecinos en términos de esta Constitución.

La calidad de ciudadano se pierde, suspende o rehabilita, en los términos señalados por la Constitución y las leyes federales.

Asimismo, el artículo 15 de la Constitución local, prevé que

Artículo 15. Son derechos de la ciudadanía:

I. Votar en las elecciones estatales y municipales, y participar en los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular y poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Sólo podrá votar la ciudadanía que posea credencial de elector y esté debidamente incluida en el listado nominal correspondiente;

...

De lo cual se colige que son ciudadanas y ciudadanos los veracruzanos y las veracruzanas, y que es un derecho de la ciudadanía el poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

En consecuencia, si la adición de la fracción III del artículo 11 de la Constitución local, otorga la calidad de veracruzanos a las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano, es evidente que dicha calidad tiene efectos electorales, pues tanto la nacionalidad como la ciudadanía, son requisitos formales para aspirar y desempeñar un cargo de elección popular.

Lo cual se corrobora con el texto del Considerando X del Dictamen que se impugna, el cual establece textualmente que la iniciativa fue presentada para evitar situaciones “restrictivas para el ejercicio de los derechos inherentes a la ciudadanía”, tal como se aprecia a continuación:

X. Que, la iniciante advierte a esta Soberanía, que aquellas legislaciones que reconocen la calidad de ciudadana o ciudadano de algunas entidades federativas, por el vínculo entre las personas y la comunidad a la que pertenecen, exclusivamente por el nacimiento de las personas, han sido consideradas restrictivas para el ejercicio de los derechos inherentes a la ciudadanía.

En ese sentido, como es un hecho notorio para esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos inherentes a la ciudadanía tienen como principal objeto el ejercicio de los derechos político-electorales, entre ellos el de votar y ser votado, tal como lo establece el artículo 35 de la CPEUM que se cita a continuación en la parte que interesa:

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

...

Por lo tanto, si la adición de la fracción III al artículo 11 de la Constitución local, es una reforma a una ley materialmente electoral, el Partido ***** se encuentra plenamente legitimado para promover la presente acción, en términos del inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la CPEUM, al ser violatoria de los artículos 14, 16, 30, 34, 73, 116, 124, 133 y 135 de la CPEUM.

El Decreto impugnado viola las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, así como los principios de supremacía constitucional, rigidez y deliberación parlamentaria, resultantes de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo segundo, 124, 133 y 135 de la Constitución Federal. Asimismo, viola los requisitos de elegibilidad previstos para el cargo de Gobernador del Estado en el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto por el diverso artículo 30, inciso A). Finalmente contraviene los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica, tutelados por los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los preceptos señalados previamente.

De acuerdo con lo anterior, la presente demanda de acción de inconstitucionalidad tiene por objeto impugnar por vicios formales y sustanciales la reforma al artículo 11, fracción III de la Constitución local, así como el resultado interpretativo que resulta de la lectura conjunta de esa disposición y de los diversos artículos 35, fracciones I y II, y 43, fracción I, de la Constitución de Veracruz, el cual afecta, como se ha dicho, el régimen de elegibilidad de las personas que aspiren a la gubernatura del estado y, en esa medida, se actualiza la impugnación a una norma de carácter electoral al regularse el ejercicio del derecho político-electoral a ser votado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2011 siguiente:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO, CONSTITUYE UNA LEY ELECTORAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE ESE MEDIO DE CONTROL DE LA

CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse respecto de las características de las normas de naturaleza electoral que pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad, sostuvo que no son sólo las contenidas en leyes o códigos electorales sustantivos, sino también las vinculadas directa o indirectamente con los procesos electorales. En ese sentido, se concluye que el artículo 80, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que establece requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Gobernador del Estado, es de naturaleza electoral, en tanto modula el ejercicio del derecho político-electoral a ser votado, si se toma en cuenta que, en términos de la Ley Electoral de Quintana Roo, no podrá registrarse a una persona como candidato al referido cargo si no cumple con todos los requisitos del precepto indicado, situación que no puede ubicarse al margen del ámbito electoral y de los procesos electorales, para efecto de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, máxime que el registro de un candidato constituye, por sí mismo, un acto inmerso en los procesos electorales, siendo la autoridad electoral la encargada de negarlo u otorgarlo.

Acción de inconstitucionalidad 74/2008. Partido de la Revolución Democrática. 12 de enero de 2010. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Encargado del engrose: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

CUESTIÓN PREVIA

La reforma constitucional aprobada por la Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como por la mayoría de los Ayuntamientos de dicha entidad federativa, resulta incompatible con la Constitución Federal **(i) al presentar irregularidades en el procedimiento legislativo de carácter invalidante que afectan los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo y al principio de deliberación parlamentaria; (ii) al vulnerar el principio de supremacía constitucional por desacatar los lineamientos establecidos en la Constitución Federal para desempeñar cargos que exigen un vínculo jurídico y político de nacimiento; y (iii) al materializar inconsistencias con los requisitos de elegibilidad de las y los gobernadores previstos por el artículo 116, fracción I, último párrafo de la Constitución Federal.**

Sin perjuicio del desarrollo argumentativo en los conceptos de invalidez respectivos, se anticipa a este Tribunal Pleno que la reforma constitucional impugnada no solo tuvo por objeto actualizar los supuestos normativos bajo los cuales una persona puede ser calificada como veracruzana, sino que con ello **modificó la lectura y sentido de otras hipótesis previstas en la Constitución local que impactan directamente en el régimen de elegibilidad de quienes aspiren a contender por la gubernatura del estado, concretamente el artículo 43, fracción I de dicho ordenamiento jurídico,** de acuerdo con el cual para ser gobernador del estado se requiere ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos.

Por lo anterior, es que se solicita a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la invalidez de la fracción III del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave el 11 de agosto de 2022, a partir de la valoración de los siguientes:

CONCEPTOS DE INVALIDEZ

PRIMER concepto de invalidez:

El Decreto impugnado **viola el procedimiento legislativo y el principio de rigidez exigido por la Constitución local para realizar reformas y adiciones a la misma, resultando en irregularidades invalidantes al afectar los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, así como las formalidades esenciales del procedimiento legislativo y el principio de deliberación parlamentaria.**

El procedimiento legislativo de reformas y adiciones a la Constitución local se realizó sin atender a lo dispuesto por el principio de rigidez previsto en el artículo 84 de dicho ordenamiento jurídico, mismo que prevé el procedimiento para reformar la Constitución, así como lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia de Reformas Constitucionales Parciales.

Conforme al artículo 84 de la Constitución de Veracruz, dicho instrumento normativo podrá ser reformado por el voto de las dos terceras partes del Congreso del Estado, en dos períodos de sesiones ordinarios sucesivos, excepto cuando las reformas tengan como propósito efectuar adecuaciones derivadas de una mandato de la Constitución Federal, en cuyo caso se aprobarán en una sola sesión ordinaria o extraordinaria, por la misma mayoría, para lo cual el Congreso declarará previamente que se trata de un procedimiento especial.

En el caso particular se advierte que la reforma fue aprobada por la Diputación Permanente del Congreso local, durante el Cuarto Período de Sesiones Extraordinarias del Primer año de ejercicio constitucional, tal y como se desprende de lo publicado en la Gaceta Legislativa número 45 del día 2 de agosto de 2022.

De lo anterior se advierte que **el Decreto impugnado no fue aprobado bajo los estándares de rigidez previstos por el artículo 84 de la Constitución local, en la medida en la que al haberse discutido el Proyecto en un solo período de sesiones extraordinarias debió justificarse por la Diputación Permanente que se trataba de un procedimiento especial cuyo propósito era el de reglamentar alguna reforma de la Constitución Federal, cuestión que no aconteció en el caso.**

De haberse observado el estándar de rigidez exigido por la propia Constitución de Veracruz, el Decreto impugnado debió discutirse durante dos períodos de sesiones ordinarios sucesivos por el Congreso del Estado y no por la Diputación Permanente, debiendo seguir las fases que prevé el propio artículo 84 de la Constitución local.

En esta medida el Decreto impugnado viola el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal, así como el principio de rigidez que debe observar cualquier cambio constitucional conforme a lo establecido por el artículo 135, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 116, párrafo primero, y 124, de la Constitución Federal.

Efectivamente, **el Decreto que se impugna inobservó en su procedimiento un requisito de rigidez que lo distingue de cualquier cambio a la legislación ordinaria y que exige la discusión sucesiva en dos períodos de sesiones ordinarias del cambio constitucional en cuestión, condición que exige una reflexión y un proceso deliberativo y de debate amplio por parte del Congreso del Estado,** el cual no puede tenerse por satisfecho en una sola sesión celebrada bajo un período de sesiones extraordinarias por la Diputación Permanente.

Respecto de las formalidades que deben observarse durante el procedimiento legislativo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas sostuvo lo siguiente:

“El artículo 116 de la Constitución Federal únicamente establece las bases para la integración y elección de los miembros de los Poderes Legislativos de los Estados, esto es, sólo establece el número de integrantes, el principio de no reelección inmediata de los diputados y la elección de diputados mediante los principios de mayoría relativa y representación proporcional, sin prever reglas que deben aplicar al procedimiento legislativo que en sus leyes se contenga; por tanto, de acuerdo con los artículos 116 y 124 constitucionales, es facultad de las Legislaturas Estatales, regular estos aspectos, aunque sin contravenir el Texto Fundamental.

Lo anterior se vincula estrechamente con los argumentos que este Tribunal Pleno sostuvo, al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 9/2005, en el sentido de que la violación a las formalidades del procedimiento legislativo no puede abordarse en esta sede constitucional, sino desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa, elegida como modelo de Estado, de acuerdo con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal, por lo que la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios distintos: por un lado, un principio que podríamos llamar de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales, cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por lo tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto y, por otro, un principio de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.

Este último principio está estrechamente vinculado con la esencia y valor mismo de la democracia, como sistema de adopción de decisiones públicas en contextos caracterizados por el pluralismo político, como es el caso de México y de la mayor parte de las democracias contemporáneas. La democracia representativa es un sistema político valioso, no solamente porque, en su contexto, las decisiones se toman por una mayoría determinada de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte, tanto de las mayorías como de las minorías políticas. Es precisamente el peso representativo y la naturaleza de la deliberación pública, lo que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo -y a la necesidad de imponer su respeto, incluso, a los legisladores mismos, cuando actúan como órgano de reforma constitucional-.

En efecto, la adopción de decisiones por mayoría, regla básica que permite resolver, en última instancia, las diferencias de opinión, es una condición necesaria de la democracia, pero no suficiente. No todo sistema que adopta la regla de la mayoría es necesariamente democrático. Junto a la regla de la mayoría, hay que tomar en consideración el valor de la representación política, material y efectiva de los ciudadanos, que tienen todos y cada uno de los grupos políticos con representación parlamentaria, así sean los minoritarios, como viene a subrayar el artículo 41 constitucional y el modo en que la aportación de información y puntos de vista por parte de todos los grupos parlamentarios contribuye a la calidad de aquello que finalmente se somete a votación.

Si el simple respeto a las reglas de votación por mayoría pudiera convalidar cualquier desconocimiento de las reglas que rigen el procedimiento legislativo previo, la dimensión deliberativa de la democracia carecería de sentido, precisamente porque las minorías, por su propia naturaleza, están predestinadas a no imponerse en la votación final, a menos que su opinión coincida con un número suficiente de integrantes de otras fuerzas políticas; por lo tanto, es aquí donde cobran toda su importancia las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías, al regular, por citar algunos ejemplos, la conformación del orden del día, las convocatorias a

las sesiones, las reglas de integración de la Cámara, la estructuración del proceso de discusión o el reflejo de las conclusiones en los soportes documentales correspondientes.

Así, en conclusión, el órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante, donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios. Lo anterior es así, porque las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear, en el transcurso de la deliberación pública, aquello que va a ser objeto de la votación final y, por tanto, otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos.

De conformidad con lo expuesto, para determinar si, en un caso concreto, las violaciones al procedimiento legislativo redundan en violación a las garantías de debido proceso y legalidad, consagradas en el artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y provocan la invalidez de la norma emitida o si, por el contrario, no tienen relevancia invalidatoria, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares:

1. El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias, expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los debates.

2. El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.

3. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

El cumplimiento de los anteriores criterios siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que, de lo que se trata, es precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Los anteriores criterios, en otras palabras, no pueden proyectarse, por su propia naturaleza, sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, puesto que su función es precisamente ayudar a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones, a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo.

Además, concluyó este Pleno, en la citada acción de inconstitucionalidad 9/2005, los criterios enunciados siempre deben aplicarse, sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender las vicisitudes o avatares que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. La entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia -como la que, por votación mayoritaria, fue aprobada en el presente caso-, por ejemplo, son circunstancias que se presentan habitualmente y ante las cuales la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados, debe hacerse cargo de las particularidades del caso concreto, sin que ello pueda desembocar, en cualquier caso, en la final desatención de los mismos.¹

De las consideraciones transcritas se advierte que el Tribunal Pleno ha identificado un principio de formalidades esenciales del procedimiento legislativo y a su vez ha

¹ Engrose de la Acción de Inconstitucionalidad 52/2006, pp. 168 a 173.

postulado criterios específicos bajo los cuales las irregularidades procedimentales pueden tener carácter invalidante, siendo algunos de ellos **(i) la exigencia de que en el procedimiento se respete la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de igualdad y libertad, situación que no puede asegurarse bajo la actuación de la Diputación Permanente durante un periodo de sesiones extraordinarias, y (ii) la culminación del procedimiento deliberativo con la aplicación correcta de las reglas de votación, cuestión que tampoco se verificó en el caso, dado que no se cumplió con la exigencia prevista en el artículo 84 de la Constitución local para reformas constitucionales ordinarias, el cual requiere que se discutan de manera sucesiva en dos periodos de sesiones ordinarias.**

Al respecto, es importante señalar que de acuerdo al criterio sustentado por el Tribunal Pleno, de una lectura sistemática de lo dispuesto por los artículos 116 y 124 constitucionales, en unión de lo señalado por los artículos 133 y 135 de la propia Constitución Federal, los Congresos locales se encuentran obligados a prever un procedimiento de reforma constitucional que satisfaga estándares de rigidez, siendo escrupulosos en la regulación del procedimiento legislativo aplicable a reformas o adiciones a las Constituciones locales.

Habida cuenta de lo anterior se advierte que las violaciones en las que incurrió la Diputación Permanente al aprobar el Decreto impugnado trascienden de tal manera que **tienen carácter invalidante, al transgredir una de las reglas de rigidez exigidas por el procedimiento de reformas constitucionales ordinarias, como lo es la discusión del asunto en dos periodos ordinarios de sesiones sucesivos, pues no se garantizó que hayan participado todas las fuerzas parlamentarias representadas en la asamblea en Pleno del Congreso del Estado.** Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 94/2001 del Tribunal Pleno:

VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio, cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que, si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario.

Acción de inconstitucionalidad 25/2001. Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo. 7 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.

En la Controversia Constitucional 19/2007, el Alto Tribunal complementó los estándares analizados, al señalar que no solo deben respetarse los cauces que permitan a las mayorías y a las minorías parlamentarias expresar y defender su

opinión en un contexto de deliberación pública, sino también es necesario atender los lineamientos relacionados con el derecho a la participación deliberativa, consistente en que todas las cuestiones que se sometan a votación del órgano legislativo sucedan en un contexto de deliberación por las partes a quienes la ley les otorga el derecho de intervenir en los debates.

Estos estándares relativos al análisis de violaciones cometidas durante los procesos legislativos han sido confirmados en las Acciones de Inconstitucionalidad 36/2013 y su acumulada 37/2013; en las Acciones de Inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015; y más recientemente, en la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019.

A similares conclusiones llegó recientemente el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 34/2021, en la que se señaló que para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo infringen las garantías al debido proceso y legalidad, es necesario evaluar que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública; que el procedimiento deliberativo culmine con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y que tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones sean públicas.

Con el fin de dimensionar la transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, así como al principio de deliberación parlamentaria, conviene apuntar cómo se desarrolló ante la Diputación Permanente del Congreso de Veracruz la aprobación del Decreto impugnado:

1. En la decimoprimer sesión ordinaria, correspondiente al segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz del día 28 de julio de 2022, la diputada Magaly Armenta Oliveros del Grupo Parlamentario de MORENA por el Distrito XXVI de Cosoleacaque, presentó ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
2. Acto seguido, y sin que de conformidad con la versión estenográfica de dicha sesión mediara solicitud al respecto, la Presidenta de la Mesa Directiva consultó a la asamblea en votación económica si se dispensaba la lectura de la iniciativa en comento, lo anterior, en virtud que la misma se hallaba publicada en la Gaceta Legislativa del Estado.
3. Luego de la verificación del resultado de la votación, la Presidenta de la Mesa Directiva declaró la dispensa de la lectura correspondiente y se sirvió turnarla para dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
4. Durante la misma sesión del día 28 de julio de 2022, y una vez agotados los puntos a tratar del orden del día, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva declaró que *"EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, HOY, JUEVES 28 DE JULIO DEL AÑO 2022, SIENDO LAS 15:31 HORAS, CLAUSURA SU SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA LXVI LEGISLATURA"*. por lo que se levantó la sesión y se convocó a los diputados electos para integrar la Diputación Permanente del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la de la LXVI Legislatura del Congreso del estado de Veracruz a conectarse, pasados 10 minutos, a través de la plataforma electrónica para llevar a cabo su Sesión de Instalación.
5. El domingo 31 de julio de 2022, a tan sólo tres días de la presentación de la iniciativa, la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales

emitió dictamen en sentido positivo, mismo que fue rubricado por el Diputado Luis Felipe Cervantes Cruz, presidente de la Comisión, así como por la Diputada Rosalinda Galindo Silva como vocal, ambos integrantes del grupo parlamentario de MORENA. Al respecto, cabe señalar que dicho dictamen no fue signado por el Secretario de la Comisión, el Diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6. Dos días después, el día 2 de agosto de 2022, estando ya instalada la Diputación Permanente correspondiente al periodo de receso respectivo, la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó el dictamen referido, para que prosiguiera con sus trámites constitucionales.

Como se puede advertir de la narración de hechos, el proceso de deliberación del Decreto impugnado duró 5 días naturales y se procesó **sin respetar las formalidades esenciales que exige el artículo 84 de la Constitución local para discutir y aprobar reformas constitucionales ordinarias durante dos periodos sucesivos de sesiones ordinarias, en franco desacato al principio de deliberación parlamentaria, (i) al no haberse garantizado la participación de todas las fuerzas políticas por haberse aprobado bajo la actuación de la Diputación Permanente y no del Congreso local en Pleno, y (ii) al no haberse aplicado correctamente las reglas de votación previstas para las reformas constitucionales ordinarias, que exigen la discusión del dictamen en dos periodos de sesiones ordinarias sucesivos. Dichas violaciones procedimentales materializan transgresiones de carácter invalidante** conforme a los criterios sustentados por el Tribunal Pleno, por lo que debe declararse la invalidez integral del Decreto impugnado.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 45 (52), en relación con el 73, de la Ley Reglamentaria de la materia, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al advertir violaciones en el procedimiento legislativo, debe declarar la inconstitucionalidad en su totalidad del **Decreto 240** por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave el **11 de agosto de 2022**.

SEGUNDO concepto de invalidez:

El Decreto impugnado **viola el principio de supremacía constitucional y de respeto al pacto federal al desacatar el vínculo jurídico y político de nacimiento que la Constitución Federal exige para el desempeño de ciertos cargos y funciones.**

Los parámetros objetivos que fija la Constitución Federal para determinar los supuestos en los que es admisible considerar normativamente la existencia de un vínculo jurídico y político entre las personas y el Estado, a partir del cual pueden derivar tanto derechos como obligaciones entre ellos (supuestos de nacionalidad), son, por extensión, aplicables para el régimen interior de las entidades federativas, de tal suerte que para la determinación de quiénes serán considerados como nativos de un estado se deberá atender a los criterios que respecto de la nacionalidad mexicana por nacimiento establece la Constitución Federal en su artículo 30, inciso A).

Sobre el particular, no debe soslayarse lo previsto en el artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución Federal, de acuerdo con el cual *"los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos"* mismas que como se ha fundamentado ya en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal."

De acuerdo con lo anterior **la libertad de configuración normativa de las entidades federativas se halla limitada por las prevenciones contempladas**

en la Constitución Federal, dentro de las cuales se encuentran diversas restricciones para ocupar determinados cargos.

Como ejemplo de lo anterior se prevén a nivel constitucional diversos supuestos en los que se exige la condición de tener la nacionalidad por nacimiento, tales como la contemplada en el artículo 32, párrafo segundo de la Constitución Federal, de acuerdo con la cual el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición constitucional, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Se trata de una reserva igualmente aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes federales.

Dentro de dichos cargos y funciones en los que se exige ser mexicano por nacimiento se encuentran: (i) cargos o comisiones en el Ejército en tiempos de paz y en la Armada y la Fuerza Aérea en todo momento (artículo 32, párrafo tercero constitucional); (ii) capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y personal que tripule embarcaciones o aeronaves mexicanas (artículo 32, párrafo tercero constitucional); (iv) Diputado (artículo 55, fracción I constitucional); (v) Presidente de la República, en cuyo caso se admite que sea hijo de padre o madre mexicanos (artículo 82, fracción I constitucional); (vi) Secretario del Despacho (artículo 91, párrafo primero constitucional); (vii) Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 95, fracción I constitucional); (viii) Fiscal General de la República (artículo 102, apartado A, párrafo segundo constitucional); (ix) Gobernador de un Estado, supuesto en el cual se exige además ser nativo de la entidad federativa (artículo 116, fracción I último párrafo constitucional).

De lo anterior se desprende que **el régimen constitucional del pacto federal exige a las entidades federativas preservar un grado de compatibilidad frente a ciertas decisiones constitucionales, como lo es la exigencia de la condición de nacionalidad por nacimiento para el ejercicio de ciertos cargos y funciones**, y que en el régimen de las entidades federativas se traduce en la exigencia de un vínculo específico con el territorio del estado para desempeñar ciertos cargos y funciones, como lo es el de Gobernador.

En este orden de ideas se advierte que el Decreto impugnado falta a este compromiso de compatibilidad al determinar que la condición de veracruzano se satisface en el caso de las personas nacidas fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con residencia efectiva de 5 años en el territorio de la entidad federativa, cuestión que se aleja de los supuestos previstos en el artículo 30, inciso A), de la Constitución Federal para ser considerado mexicano por nacimiento, y que contrasta claramente, en una lectura conjunta con el diverso artículo 43, fracción I, de la Constitución de Veracruz, con la exigencia contemplada en el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal, para ser Gobernador de un estado.

Asimismo, el Decreto impugnado impacta en el régimen de elegibilidad para Gobernador del estado y contraviene los requisitos previstos en para ello en la Constitución Federal.

Como se ha dicho, el artículo 116 de la Constitución Federal prevé lineamientos constitucionales para la organización. De los poderes públicos en las entidades federativas y, en esa medida, constituye, junto con los diversos artículos 73 y 117, límites a la libertad de configuración normativa que el artículo 124 atribuye a los Congresos locales.

En este aspecto se reitera que el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal es claro al prescribir que *“sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él...”* Esto es, **exige un doble vínculo de territorialidad tanto al territorio nacional como al de la entidad federativa que corresponda. De ahí que los Congresos locales carezcan de libertad de configuración normativa para modificar la exigencia constitucional de la condición de nacimiento y vínculo al territorio, al regular el régimen de elegibilidad de los gobernadores.**

Sobre el particular, en la tesis de jurisprudencia P./J. 3/2011 el Tribunal Pleno sostuvo que el legislador local no posee libre configuración normativa y debe atender las condiciones exigidas por el régimen de elegibilidad de los gobernadores contempladas en la Constitución federal, a saber: (i) ser ciudadano mexicano, (ii) ser nativo de la entidad federativa con residencia efectiva no menor a 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección, y (iii) tener treinta y cinco años cumplidos al día de la elección, o menos si así lo establecen las Constituciones locales:

GOBERNADOR DE UN ESTADO. EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FIJA LAS CONDICIONES PARA QUE UNA PERSONA PUEDA POSTULARSE PARA ESE CARGO, DEBE ANALIZARSE SISTEMÁTICAMENTE CON EL DIVERSO 35, FRACCIÓN II, DEL MISMO ORDENAMIENTO FUNDAMENTAL, EN TANTO ESTE ÚLTIMO ESTABLECE EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A SER VOTADOS PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. La posibilidad de ser Gobernador de un Estado forma parte del derecho contenido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la prerrogativa de ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, siempre que se cuente con las calidades que al efecto establezca la ley, lo que implica que estas últimas están sujetas a configuración legal estatal. No obstante, lo anterior, si bien es cierto que el derecho a ser elegido para ser Gobernador debe encontrarse armonizado con las calidades que, con base en sus necesidades, establezca cada entidad federativa, también lo es que no debe entenderse que el legislador local posea total libertad al respecto, toda vez que no pueden dejar de atenderse las condiciones o requisitos determinados en la Constitución General de la República. De esta manera, el artículo 35, fracción II, debe interpretarse sistemáticamente con el 116, fracción I, ambos constitucionales -que fija como condiciones para ocupar el cargo de Gobernador de un Estado: a) Ser ciudadano mexicano; b) Ser nativo de la entidad o con residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección; y, c) Tener treinta años cumplidos al día de la elección, o menos, si así lo establecen las Constituciones Locales-, con el objeto de hacer efectivo el establecimiento de calidades razonables y proporcionales que permitan una participación más amplia y un mayor acceso al derecho político a ser votado, lo cual armoniza con diversas normas internacionales, tales como los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indican que las restricciones a los derechos fundamentales, entre ellos, los derechos políticos, no deben ser discriminatorias y deben atender a cuestiones de necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática, para lo cual se optará por elegir las que restrinjan en menor medida el derecho protegido y guarden proporcionalidad con el propósito perseguido.

Acción de inconstitucionalidad 74/2008. Partido de la Revolución Democrática. 12 de enero de 2010. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Encargado del engrose: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

De lo anterior se advierte que en el presente caso la Diputación Permanente del Estado de Veracruz, independientemente de incurrir en violaciones de carácter invalidante a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, desatendió las restricciones a la libertad de configuración normativa que establece el artículo 116 constitucional, violando con ello los principios de supremacía constitucional y de respeto al pacto federal que se desprenden del propio artículo 116 y del diverso 133 constitucionales.

No obsta a la conclusión anterior el hecho de que el Decreto impugnado pretenda flexibilizar los criterios de elegibilidad para maximizar el ejercicio de un derecho político o de la ciudadanía como lo es el de ser votado. Si bien el derecho a ser votado a un cargo de elección popular es un derecho fundamental, también se constituye en una garantía del sistema representativo y democrático de gobierno que se acoge en los artículos 40, 41 y 116 constitucionales, en tanto quienes han de ocupar la titularidad de los Poderes de la Federación y de los Estados de la República, en representación del pueblo mexicano, requieren cumplir ciertos requisitos de la máxima relevancia que los vincule a la Nación Mexicana, tales como la nacionalidad o la residencia, así como de idoneidad y compatibilidad para el cargo, entre los que se cuenta la edad o algunas prohibiciones que se establecen en la propia Constitución y en las leyes secundarias.

Estos requisitos son de carácter positivo (por ejemplo, ser ciudadano mexicano, contar con determinada edad, residir en un lugar determinado por cierto tiempo, etcétera). Así también se prevén otros supuestos denominados de incompatibilidad para el ejercicio del cargo, que se llegan a considerar como aspectos de carácter negativo para determinar la inelegibilidad de un candidato (por ejemplo, no ser ministro de un culto religioso, no desempeñar determinado empleo o cargo, no pertenecer al ejército, etcétera).

En este sentido, cobra la mayor importancia el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, entendidos como las calidades, circunstancias o condiciones necesarias para que un ciudadano pueda ser votado y ocupar un cargo. Tanto, que la falta de surtimiento de alguno de tales requisitos o la existencia de alguno de los supuestos de incompatibilidad para desempeñar el cargo, impide que el ciudadano pueda contender en una elección popular y, de ser el caso, provocar la nulidad de la elección.

Así que, mientras que para ocupar el cargo de Gobernador se establecen ciertos requisitos esenciales a los que queda constreñida la legislación local, tratándose de los miembros de las legislaturas locales e integrantes de los Ayuntamientos, la libertad de configuración legislativa en esta materia se advierte mayor, en la medida que sólo establece algunos lineamientos mínimos para su elección, pero no así por cuanto a los requisitos y calidades que deben cubrir.

En este orden de ideas, como se apuntó en consideraciones precedentes, si bien conforme al artículo 35, fracción II, del Pacto Federal, es prerrogativa de los ciudadanos mexicanos ser votados para todos los cargos de elección popular, siempre que cuenten con las calidades que al efecto establezca la ley, lo que implica que estas últimas están sujetas a configuración legal estatal, lo cierto es que el legislador local no goza de una libertad absoluta, pues no puede dejar de atender las condiciones o requisitos que establece la Constitución General de la República. De esta manera, el artículo 35, fracción II, debe interpretarse sistemáticamente con el 116, fracción I, ambos de la Ley Fundamental.

El Decreto impugnado contraviene lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Federal, pues establece presupuestos sobre inclusivos y desproporcionales que inciden negativamente sobre la prerrogativa de votar y ser votado, pues el hecho de que toda persona que pueda tener hijos, con el único requisito de trasladarse a Veracruz, sea reputada como veracruzana y por tanto titular de derechos y obligaciones con dicha entidad, trasciende cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 30, inciso A), de la Constitución Federal para el caso de quienes pueden ser considerados mexicanos por nacimiento.

A mayor abundamiento, debe decirse que la fracción III del artículo 11 de la Constitución local que se impugna, establece que son veracruzanos los nacidos fuera del territorio del estado, **con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio de Veracruz**, de lo cual se advierte que la reforma constitucional impugnada prevé que son veracruzanos, no solo los

nacidos en el territorio del Estado, o los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero; sino que ahora, lo serán quienes aun no habiendo nacido en Veracruz, tengan hijos veracruzanos o cuenten con una residencia efectiva de cinco años en la entidad.

De lo cual se advierte que la Constitución local, hasta antes de la reforma, otorgaba la **ciudadanía veracruzana** con base en los criterios de **nacimiento** (los nacidos en el territorio del Estado *-ius soli-*), y de **filiación ascendente** (los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero *-ius sanguinis-*).

Sin embargo, con la reforma se establecen nuevos criterios consistentes en otorgar la ciudadanía a las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, **con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano**; es decir, se agregan dos criterios:

- a) El de **filiación descendente** (tener hijos veracruzanos); y
- b) El de **residencia efectiva** de cinco años (vínculo entre las personas y la comunidad).

En el caso concreto, **el criterio de filiación descendente** (tener hijos veracruzanos), es inconstitucional, por las razones siguientes;

El ***ius sanguinis*** establece la nacionalidad gracias al vínculo de sangre, no se tiene conciencia alguna para adquirirla, sino que **es un efecto hereditario**.

Por su parte, el ***ius soli*** es un criterio jurídico para determinar la nacionalidad de una persona física **por su nacimiento**, es decir, la identidad nacional se determinará por el lugar en el que se produce el nacimiento de una persona, con independencia del origen de los progenitores. Este principio, **es una forma también inconsciente de adquirirla**.

Así, el nacional de un país es quien forma parte de una nación, se vincula con la misma y tiene reconocidos una serie de derechos y obligaciones.

La nacionalidad mexicana se adquiere por:

- a) Nacimiento en el territorio nacional (artículo 30 de la CPEUM) *-ius soli -*;
- b) Filiación: padre o madre mexicano por nacimiento o naturalización *-ius sanguinis-*, o
- c) Naturalizarse en el país.

La **nacionalidad permite, a su vez, acceder al *status* de ciudadanía** (cumplir 18 años y tener modo honesto de vivir (artículo 34 de la CPEUM) y este es necesario para ejercer los derechos políticos (los que implican participar en asuntos públicos del país, como votar y ser votado o ser nombrado para el servicio público); pero, paradójicamente dependiendo de la forma en que se adquiriera la nacionalidad mexicana, se pueden ejercer todos o sólo alguno de ellos.

El artículo 30 de la CPEUM establece que:

Capítulo II De los Mexicanos

Artículo 30. *La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.*

A) Son mexicanos por nacimiento:

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano;

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

B) Son mexicanos por naturalización:

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

Por su parte, el artículo 34 de la CPEUM establece que son ciudadanos de la República, los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir.

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y

II. Tener un modo honesto de vivir.

Finalmente, los artículos 35, 36, 37 y 38 de la CPEUM señalan los derechos, las obligaciones y las causales de suspensión o pérdida de la ciudadanía y nacionalidad mexicana.

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley;

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley.

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

- 2o.** *Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;*
- 3o.** *No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;*
- 4o.** *El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.*

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

- 5o.** *Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto;*
- 6o.** *Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y*
- 7o.** *Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.*

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato.

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- 1o.** *Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.*

El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato.

- 2o.** Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

- 3o.** Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

- 4o.** Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.

- 5o.** El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99.

- 6o.** La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84.

- 7o.** Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

- 8o.** El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

- I.** Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,

- II.** Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley;
- III.** Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley;
- IV.** Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y

- V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

Artículo 37.

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y

II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

C) La ciudadanía mexicana se pierde:

I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;

II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal;

III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal.

El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras;

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;

V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y

VI. En los demás casos que fijan las leyes.

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Así, como ya se anticipó, de conformidad con los apartados A y B del referido artículo 30 de la CPEUM, la **nacionalidad mexicana** se adquiere por nacimiento (*ius soli* -derecho de suelo-, y de *ius sanguinis* -derecho de sangre-), o bien por naturalización, la cual se obtiene por voluntad de la persona, lo que se traduce en un acto soberano del Estado que otorga la nacionalidad.

Dicho de otra manera, conforme al artículo 30 de la Carta Magna, las hipótesis para que una persona pueda adquirir la nacionalidad mexicana **por nacimiento** son: i) que nazca en territorio nacional; ii) que nazca en el extranjero, pero al menos

uno de sus padres haya nacido en territorio nacional; iii) que nazca en el extranjero, pero al menos uno de sus padres sea mexicano por naturalización; y iv) que nazca a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, de lo cual se advierte que en la CPEUM no existe el supuesto de otorgarla por tener hijas o hijos mexicanos.

Resaltándose que dicho artículo ha tenido cinco reformas (1ª Reforma DOF 18-01-1934, 2ª Reforma DOF 26-12-1969, 3ª Reforma DOF 31-12-1974, 4ª Reforma DOF 20-03-1997, y 5ª Reforma DOF 17-05-2021), y en ninguna de ellas, ni mucho menos en la redacción original, se ha establecido que la nacionalidad se adquiera por tener hijas o hijos nacidos en México; sino al contrario, se puede otorgar por tener madre o padre mexicanos, pues la nacionalidad pasa de padres a hijos y no de hijos a padres.

Por su parte, la ciudadanía es el vínculo de carácter jurídico que tiene lugar entre un individuo y la sociedad organizada de la cual forma parte, y está relacionada con la posibilidad de participar activamente en las decisiones políticas de un Estado, emitir sufragio, y postularse a cargos públicos, entre otros aspectos; en el caso de la Constitución de Veracruz, esta sigue los mismos principios constitucionales de la nacionalidad, para reconocer la ciudadanía en la entidad federativa.

En ese sentido, es evidente que, SIGUIENDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, EL LUGAR DE NACIMIENTO O DE RESIDENCIA DE LOS HIJOS, NO PUEDE DETERMINAR LA CIUDADANÍA DE LOS PADRES, COMO ERRÓNEAMENTE LO ESTABLECE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE QUE SE IMPUGNA, pues ello es contrario a los artículos 30 y 34 de la CPEUM.

Lo anterior es así, porque conforme al principio de supremacía constitucional la CPEUM es la norma superior y, por tanto, las constituciones de los estados no pueden contrariar su espíritu, sino por el contrario, debe adecuarse a los principios democráticos que de ella emanen.

En efecto, la Constitución al ser la norma jerárquicamente superior de un país da validez a las normas secundarias que se ajusten a sus postulados jurídicos.

En ese sentido, serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

En el caso, la fracción III del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que se impugna, también es contraria a lo dispuesto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción I, último párrafo de la CPEUM, el cual establece que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, pero con sujeción las normas previstas en dicho precepto supremo, entre ellas la que establece que sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa, sin que se advierta la mención a tener hijos nacidos en el estado.

El texto, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

- I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad.

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

- a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;
- b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período.

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.

...

Y si bien es cierto que el artículo 11 de la Constitución local no se refiere expresamente a los requisitos para ser gobernador, el ser Veracruzano o Veracruzana si lo es, lo cual da pauta a que personas que no son nativas del estado o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, aspiren al cargo, CON LO CUAL ES EVIDENTE QUE LA REFORMA INTRODUJO UN ASPECTO QUE NO EXISTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, tal como se advierte de la vigente redacción del artículo 43, fracciones I y II de la Constitución local, el cual establece lo siguiente:

Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se requiere:

I. Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección;

...

A respecto, la Segunda Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la **Contradicción de Tesis 212/2019²**, estableció con meridiana claridad que las hipótesis previstas en el artículo 30 de la CPEUM, están dirigidas a los sujetos que están explícitamente contemplados en ella, sin que pueda extenderse a otras hipótesis no previstas, ya que los supuestos son limitativos y no enunciativos, y que esta **interpretación estricta** se corrobora del propio texto del artículo constitucional, así como de la intención expresada por el constituyente y la interpretación sistemática de la Constitución en relación con la legislación ordinaria relativa a la nacionalidad.

² **CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2019.** ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN. Registro Núm. 29217; Décima Época; Segunda Sala; Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 03 de enero de 2020 10:04 h

Dicho criterio es del tenor literal siguiente:

NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. EL ARTÍCULO 30, INCISO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ES EXTENSIVO A SUPUESTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE. La hipótesis contenida en el artículo 30, inciso A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe interpretarse de manera estricta, es decir, que abarca únicamente el supuesto relativo a que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padre o madre mexicanos que hayan nacido en territorio nacional (primera generación). Así, dicha porción normativa se refiere sólo a los sujetos que están explícitamente contemplados en ella, sin que pueda extenderse a otras hipótesis no previstas, ya que los supuestos son limitativos y no enunciativos. Esta interpretación estricta se corrobora del propio texto del artículo constitucional, así como de la intención expresada por el constituyente y la interpretación sistemática de la Constitución en relación con la legislación ordinaria relativa a la nacionalidad.

En ese orden sentido, la Sala sostuvo que el texto constitucional es claro respecto a que el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento no es extensivo a otros supuestos no previstos expresamente por el Constituyente, es decir, las hipótesis establecidas en el artículo 30, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben interpretarse de manera estricta, pues se destinan sólo a los sujetos que están explícitamente contemplados en la norma, supuestos que son limitativos y no enunciativos, por lo que no puede interpretarse de otra manera.

En el caso de la Constitución de Veracruz, siguiendo los principios contemplados en el artículo 30 de la CPEUM, **no puede introducir nuevas hipótesis para determinar quiénes son veracruzanos (como la de tener hijos veracruzanos), porque es evidente que la Constitución local, sigue las mismas reglas que establece la Constitución federal para determinar la nacionalidad y las traslada para determinar la ciudadanía en el estado;** y ello es así, porque como ya lo dijo la referida Sala, las hipótesis establecidas en el artículo 30, inciso A, de la CPEUM deben interpretarse de manera estricta, pues se destinan sólo a los sujetos que están explícitamente contemplados en la norma, supuestos que son limitativos y no enunciativos, por lo que no puede interpretarse de otra manera, lo cual **es un principio que aplica también para la Constitución de Veracruz** y demuestra que el **Decreto 240** por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave el **11 de agosto de 2022**, así como los artículos Transitorios del mismo Decreto, **es contrario a la Constitución Federal.**

Por otra parte, se hace notar a sus Señorías **que la reforma que se impugna, evidentemente está encaminada para facilitar la candidatura a la gubernatura del Estado a una persona en lo particular de nombre ROCIO NAHLE GARCÍA, actual Secretaria de Energía,** pues es claro que no resulta aplicable a la elección de diputaciones, sino unidamente a la de gobernador, tal como se advierte de la redacción del artículo 22 de la Constitución local, el cual no considera el requisito de ser Veracruzana o Veracruzano para ser legislador:

Artículo 22. Por cada diputado propietario se elegirá a un suplente.

En ambos casos se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Saber leer y escribir y;

III. Residir en el distrito que corresponda o en la circunscripción del Estado, por lo menos tres años antes del día de la elección.

En esa línea argumentativa, **es un hecho notorio que la reforma incumplió con los requisitos de generalidad y abstracción**, de lo cual dieron cuenta los medios de comunicación en su momento, tal como se advierte a continuación:

2022-08-02 19:58

Veracruz: aprueban "ley Nahle"; avalaría candidatura de la zacatecana

Eirinet Gómez, corresponsal Tiempo de lectura: 3 min

Xalapa, Ver. La mayoría de Morena en el Congreso local aprobó la denominada Ley Nahle, una reforma que modifica la Constitución de Veracruz en su artículo 11, para que los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en la entidad, puedan ser considerados veracruzanos.

La sesión virtual, convocada de forma extraordinaria, con menos de dos horas, y para votar este único punto, fue cuestionada por legisladores de oposición como la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, quien señaló que la denominada Ley Nahle "es una iniciativa impulsada desde palacio de gobierno", que usa al Congreso local como una oficina de trámite sin independencia del Ejecutivo.

"Hay mucha prisa por aprobar, aunque el término legal para hacer el cambio es agosto del 2024 (...) se hace vía fast track".

La oposición considera a la iniciativa de decreto presentada por la diputada de Morena, Magaly Armenta Oliveros, como la "Ley Nahle", por beneficiar a la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, de origen zacatecano, y a quien perfilan como posible candidata a la gubernatura de Veracruz para el 2024.

Ruth Callejas observó que la modificación de ley es un "simple capricho" del partido en el poder, para imponer a una candidata que no es veracruzana y la cual ya se decidió irá en las boletas en el 2024, sin consultar a su militancia.

La legisladora de MC dijo que hay una similitud entre lo que se hizo este martes y lo que se hizo en el 2021, cuando se aprobó el delito de ultrajes a la autoridad, que más tarde fue declarado inconstitucional por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El legislador de Acción Nacional (PAN) Miguel Hermida, consideró que la iniciativa "es un claro traje a la medida para abrirle la puerta a Rocío Nahle para ser candidata a Gobernadora en el año 2024, a pesar de haber nacido en Rio Grande, Zacatecas. Rocío Nahle tiene hijos veracruzanos y dice haber vivido en Veracruz desde hace muchos años".

El legislador puso en evidencia que mientras muchas iniciativas se encuentran en la congeladora, y en seis meses de trabajo legislativo sólo han aprobado ocho cambios a leyes locales, la Ley Nahle se revisó y votó en cinco días.

En su intervención, la diputada de Morena, Magaly Armenta, dijo que su iniciativa no tiene dedicatoria, ni tintes partidistas, e insistió en que su propuesta es "un reconocimiento para que quienes tiene hijos o están en el estado contribuyen al bienestar social (...) ellos lo aman tanto o más que los veracruzanos de nacimiento".

En el momento de la votación, los panistas Othón Hernández Candanedo, Hugo Saavedra y Nora Jessica, así como los del PT, Ramon Díaz Ávila, José Luis Tehuintle, y las del Verde, Tanía Cruz Mejía y Citlalli Medellín Careaga se sumaron a Morena y con 31 votos votaron a favor de la reforma. En el caso de los tres diputados del PRI no participaron en el debate, pero votaron en contra.

(<https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/02/estados/veracruz-aprueban-ley-nahle-avalaria-candidatura-de-la-zacatecana/>)

Yared De La Rosa agosto 3, 2022 @ 1:05 pm

PAN y PRI critican ley que permitiría a Nahle ser candidata a gobernadora de Veracruz

La ahora llamada 'Ley Nahle' permite que personas no nacidas en Veracruz puedan contender por la candidatura al gobierno del estado.

Diputados del PAN y del PRI criticaron la llamada "Ley Nahle" en Veracruz porque para ellos representa un golpe autoritario de Morena a la Constitución de la entidad.

Ello porque en sesión extraordinaria diputados de Veracruz aprobaron modificaciones para permitir que personas no nacidas en el estado puedan ser candidatos a gobernadores, lo que facilita que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, pueda contener por el cargo en 2024, aunque es de Zacatecas.

"Representa un golpe autoritario de Morena y sus aliados, porque en lugar de elaborar leyes que beneficien a los veracruzanos, hacen bodrios legislativos con dedicatoria para favorecer a la secretaria de Energía del gobierno federal", dijo la diputada por el PRI Lorena Piñón Rivera.

Además, la legisladora de Veracruz confió en que exista oposición en los cabildos para detener esta ley, pues por trámite legislativo, estas modificaciones a la Constitución debe ser enviadas a los ayuntamientos.

Mientras, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, señaló que sus tres compañeros panistas que votaron a favor (Othón Hernández, actual coordinador de la bancada, Hugo González, vicepresidente de la legislatura, y Nora Lagunes) deberán explicar por qué lo hicieron ante el órgano de control interno del partido.

En conferencia, el legislador señaló que estos tres legisladores desobedecieron al PAN, que había determinado que se debía votar en contra de esta reforma constitucional.

"No entiendo por qué no acataron los diputados (...) Ellos desobedecieron y tendrán que explicarlo", dijo el legislador.

Comentó que el partido presentará una acción de inconstitucionalidad por tratarse de una ley privativa que busca beneficiar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

(<https://www.forbes.com.mx/pan-y-pri-critican-la-ley-nahle-en-veracruz/>)

MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022

Ley Nahle: todo lo que debes saber de la polémica reforma constitucional en Veracruz

Una reforma a la Constitución de Veracruz, propuesta por una diputada local de Morena, desató críticas por presuntamente estar hecha a modo para la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Yahir Fragoso | El Sol de México

La semana pasada, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma a su Constitución que se ha dado a conocer en la discusión nacional como la "Ley Nahle", en referencia a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

El pasado 2 de agosto el Congreso de Veracruz aprobó una propuesta de acuerdo emanada de Morena para modificar el artículo 11 de la Constitución local, donde se establecen los criterios para otorgar la ciudadanía veracruzana.

¿Qué dice la Ley Nahle?

La diputada de Morena Magaly Armenta Oliveros pidió adicionar al artículo citado el párrafo que establece que son veracruzanos: "las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano".

Previamente la Carta Magna de la entidad sólo preveía como veracruzanos a los hijos de padre o madre nativos del estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.

¿Por qué se relaciona la iniciativa con Rocío Nahle?

La iniciativa presentada por la diputada morenista despertó suspicacias entre los partidos de oposición debido al momento en el que se presenta, ya que en 2024 Veracruz renueva su gubernatura.

En este sentido, acusan que las modificaciones a la Constitución veracruzana están pensadas para permitir que la titular de la Secretaría de Energía (Sener)

pueda competir como abanderada de Morena en las siguientes elecciones al gobierno de Veracruz.

Lo anterior debido a que gracias al cambio en el artículo 11 la funcionaria, de origen zacatecano, podría ser considerada como veracruzana, ya que sus hijos nacieron en la entidad.

Por su parte, Rocío Nahle comentó a través de sus redes sociales que no caería en provocaciones ante los señalamientos por parte de la oposición.

En el mismo sentido, el actual gobernador del estado, Cuifláhuac García, sostuvo que el cambio en la Constitución lo único que hace es abrir las puertas para que quien quiera competir por un puesto de elección popular pueda hacerlo.

Recordó que desde la **Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)** se determinó que el origen de un mexicano no puede ser impedimento para contender por cargos de elección popular en un estado distinto al de su nacimiento, por lo que todas las entidades deben armonizar su ley.

<https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/que-es-la-ley-nahle-la-reforma-a-la-constitucion-de-veracruz-8712844.html>

Ayuntamientos de Veracruz aprueban la llamada "Ley Nahle"

La Secretaría General del Congreso del Estado informó que recibieron actas de sesiones de Cabildo de 116 ayuntamientos con la aprobación de la reforma, misma que permitiría a la secretaria de Energía buscar la gubernatura

Un total de 116 Cabildos de **Ayuntamientos de Veracruz** aprobaron la reforma constitucional morenista que modificó las causales para ser considerado veracruzano y con ello estar en posibilidades de buscar la gubernatura del estado.

La reforma fue bautizada por la oposición como "Ley Nahle" porque permitiría a la secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle, poder buscar la gubernatura en el 2024.

La Secretaría General del Congreso del Estado informó que recibieron actas de sesiones de Cabildo de 116 ayuntamientos con la aprobación la reforma, un requisito indispensable para que entre en vigor.

Esas dos causales se le agregaron a la Constitución, la cual establecía que para ser considerado veracruzano era necesario ser hijo de veracruzanos.

Y la propia Carta Magna establece que para ser candidato a la gubernatura es necesario ser veracruzano, por lo que con esta reforma, acusó la oposición, la funcionaria federal podrá competir en la elecciones del 2024.

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente turnó el Decreto al titular del Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.

(<https://www.eluniversal.com.mx/estados/ayuntamientos-de-veracruz-aprueban-la-llamada-ley-nahle>)

Ley Nahle: Cabildos aprueban reforma en 9 días. ¿Qué sigue?

Para ser válida, la reforma al artículo 11 de la Constitución de Veracruz necesitaba ser aprobada por los cabildos de 116 municipios. Esta reforma, conocida como "Ley Nahle", permite la candidatura de la secretaria de Energía a la gubernatura

Morena, partido en el poder en Veracruz, mostró su fuerza política al validar en espacio de 9 días la llamada "Ley Nahle".

Dicho proyecto adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política local, estableciendo que se considera como veracruzano a las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en la entidad.

La reforma fue bautizada en medios de comunicación debido a que gracias a ésta foráneos como la zacatecana y titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, podría participar en la elección para la gubernatura en el proceso electoral 2024.

Este jueves la Secretaría General de Domingo Bahena Corbalá informó al pleno de la Diputación Permanente que recibió 116 actas de cabildo que constan los acuerdos de aprobación del decreto aprobado por los diputados el pasado 2 de agosto con 38 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.

(...)

¿QUÉ SIGUE?

Con la aprobación de 116 de los 212 Cabildos de los Ayuntamientos en Veracruz sólo resta que la Ley Nahle sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado para que tenga validez.

Lo anterior gracias a que se estableció un procedimiento especial de reformas que valida la adición de la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado.

Los Cabildos que realizaron una sesión extraordinaria para aprobar el decreto son:

Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Astacinga y Atoyac.

También Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Cerro Azul, Chacaltianguis, Chalma, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chocamán, Chumatlán, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, El Higo, Emiliano Zapata, Espinal.

Asimismo, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilimatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jáltipan, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes.

Además, Martínez de la Torre, Miahuatlán, Minatitlán, Misantra, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Naolinco, Naranjos Amatlán, Nogales, Oluta, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Paso del Macho, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Lucio.

Finalmente, Río Blanco, Salta Barranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Tuxtla, Soconusco, Soledad de Doblado, Tancoco, Tantima, Tecolutla, Tempoal, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tierra Blanca, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Villa Aldama, Xalapa y Zongolica.

(<https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/8/11/ley-nahle-cabildos-aprueban-reforma-en-dias-que-sigue-387893.html>)

De igual manera otros medios dieron cuenta del hecho, tal como se puede apreciar del contenido de las ligas siguientes:

<https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/8/3/el-congreso-de-veracruz-aprueba-en-sesion-expres-la-llamada-ley-nahle-290827.html>

El Congreso de Veracruz aprueba en sesión exprés la llamada "Ley Nahle"

Con 38 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, aprueba la reforma que reconoce como veracruzanas a personas no nacidas en la entidad, con lo cual le abre las puertas a quienes busquen una candidatura.

<https://www.cronica.com.mx/nacional/avalan-ley-nahle-veracruz-oposicion-acusa-beneficia-secretaria-energia.html>

Avalan Ley Nahle en Veracruz; oposición acusa que beneficia a la secretaria de Energía

La reforma a la constitución local amplía el reconocimiento de la ciudadanía a personas que nacieron fuera del estado.
<https://www.milenio.com/estados/veracruz-aprueban-ley-nahle-buscar-gubernatura>

En Veracruz, aprueban ley para que personas no nacidas en el estado puedan ser gobernadoras

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, podrá ser candidata a la gubernatura del estado, sin haber nacido en la entidad como establece la Constitución local.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/rechazan-reforma-que-beneficia-a-nahle-para-2024/ar2447396

Rechazan reforma que beneficia a Nahle para 2024

Legisladores federales criticaron que el Congreso de Veracruz favorezca la agenda de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, y demandaron a Morena que no les quieran dar "gato por liebre"

<https://www.contrareplica.mx/nota-Aprueban-Ley-Nahle--en-Veracruz-la-zacatecana-podra-aspirar-a-un-cargo-politico--20222814>

Aprueban "Ley Nahle" en Veracruz; la zacatecana podrá aspirar a un cargo político

<https://www.animalpolitico.com/2022/08/congreso-de-veracruz-aprueba-reforma-que-beneficia-a-nahle/>

A pesar de nacer originalmente en Zacatecas, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, podrá aspirar a algún cargo político y también a la gubernatura de Veracruz, luego de las modificaciones a la Constitución local que es conocida como "Ley Nahle".

Congreso de Veracruz aprueba reforma que beneficia a Nahle; podría ser candidata a gobernadora pese a ser originaria de Zacatecas.

Esta modificación podría beneficiar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien ha sido mencionada como una de las fichas de Morena para contender por la gubernatura.

<https://www.24-horas.mx/2022/08/04/se-van-pan-y-pri-contr-la-ley-nahle-en-veracruz/>

Se van PAN y PRI contra la Ley Nahle, en Veracruz

Legisladores de PRI y PAN criticaron la aprobación de la llamada Ley Nahle en el Congreso de Veracruz y afirmaron que representa un "golpe autoritario" de Morena y una normatividad a modo para beneficiar caprichos políticos.

<https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/avalan-en-veracruz-la-ley-nahle-para-permitirle-ser-candidata>

Avalan en Veracruz la 'Ley Nahle', para permitirle ser candidata

Ciudad de México.- Con 38 sufragios a favor, 11 en contra y cero abstenciones, diputados de Veracruz aprobaron en lo general y lo

particular la iniciativa llamada 'Ley Nahle', la cual permitirá a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, ser candidata a la gubernatura en 2024 pese haber nacido en Zacatecas.

<https://www.rochainforma.com/ley-nahle-traje-a-medida-para-que-secretaria-de-energia-llegue-a-gubernatura-de-veracruz/>

Ley Nahle, traje a la medida para que secretaria de Energía llegue a gubernatura de Veracruz

Alejandro Aguirre, periodista y analista político de Veracruz, habla con Ricardo Rocha sobre la llamada "Ley Nahle"

A mayor abundamiento, la reforma a la Constitución local que se impugna, también es violatoria del artículo 73, fracción XVI de la Constitución federal, el cual dispone que corresponde al Congreso de la Unión el **dictar leyes sobre nacionalidad y ciudadanía**, tal como se aprecia de la siguiente cita:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(...)

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República

...

Lo anterior, porque sin bien las entidades federativas tienen atribuciones para emitir sus propias Constituciones políticas en el ámbito local, las disposiciones contenidas en estas no deberán contravenir las estipulaciones del pacto federal, tal como lo dispone el artículo 41 de la CPEUM

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

...

En ese sentido, resulta evidente que la adición de la fracción III del artículo 11 de la Constitución local, **es una disposición relacionada con la ciudadanía en el estado de Veracruz** que, si bien el legislador local puede incluir en su norma fundamental al tener reconocida su libertad configurativa, **ello debe ser observado las disposiciones de la Constitución federal y no incluyendo nuevas hipótesis que están reservadas en primer orden al Congreso de la Unión.**

En consecuencia, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe declarar la inconstitucionalidad en su totalidad del **Decreto 240** por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave el **11 de agosto de 2022.**

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

La reforma a la Constitución local que se impugna materializa un régimen de elegibilidad para Gobernador del estado contrario a la Constitución Federal, que en caso de preserevarse hasta en tanto se resuelva el fondo de la presente acción de inconstitucionalidad, pone en riesgo la estabilidad del proceso electoral para la gubernatura y podría vulnerar de manera irreparable derechos político-electorales de personas nativas del estado de Veracruz que aspiren a la gubernatura.

En esa medida, no pasa inadvertido lo dispuesto en último párrafo del artículo 64 de la Ley Reglamentaria, de acuerdo con la cual la admisión de la acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma impugnada. Sin perjuicio de ello se advierte que **la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver los recursos de reclamación 91/2018-CA, 92/2018-CA y 95/2018-CA**, derivados de la acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría legislativa del Senado de la República en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, **sostuvo que sí es posible otorgar la suspensión contra los efectos de una norma general cuando se puedan vulnerar de manera irreparable derechos fundamentales** (en este caso de los servidores públicos).

La lectura del último párrafo del artículo 64 de la Ley Reglamentaria, sostenida por la Primera Sala en la resolución de los recursos de reclamación indicados, admitió la viabilidad de conceder la suspensión en aquellos casos en los que se controviertan normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión a derechos fundamentales; lo anterior bajo la consideración adicional de que **la suspensión no solo opera como medida cautelar, sino que también posee una dimensión de carácter tutelar para prevenir daños trascendentes no solo a las partes sino a la sociedad en general.**

Por ello, **se solicita la suspensión** de los efectos y consecuencias de la adición a la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave el 11 de agosto de 2022.

Por todas las razones antes expuestas en los conceptos de invalidez, y a lo largo de la demanda, se solicita a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de los preceptos impugnados.

Asimismo, se solicita que, con base en el artículo 41 de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, se extienda la declaratoria de invalidez a las normas cuya validez depende de las normas que se invaliden en sentencia.

PRUEBAS

El Partido de la Revolucion Democratica ofrece los medios de prueba siguientes:

- 1) **LA DOCUMENTAL**, consistente en el nombramiento de fecha 8 de agosto de 2020 expedido a mi favor por la Direccion Nacional del Partido de la Revolucion Democratica signado por el Ing. Jesus Zambrano Grijalva Presidente Nacional del Partido de la Revolucion Democratica, con la cual se acredita la personería de quien suscribe la demanda en representación del Partido de la Revolucion Democratica.
- 2) **LAS DOCUMENTALES**, consistentes en la Gaceta Legislativa número 45, de fecha 2 de agosto de 2022, órgano oficial de difusión interna del Congreso del Estado de Veracruz, LXVI Legislatura, la cual puede ser consultada en la dirección de internet www.legisver.gob.mx; y en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 318, de fecha 11 de agosto de 2022, órgano del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual puede ser consultada en <http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/>
- 3) **LAS DOCUMENTALES**, consistentes en las notas periodísticas contenidas en las ligas que se insertan en la presente demanda.
- 4) **LA PRUEBA TÉCNICA**, consistente en el video de la sesión correspondiente al Cuarto Periodo de Sesiones Extraordinarias, del Primer Año de ejercicio constitucional, de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Veracruz, LXVI Legislatura, celebrada con fecha 2 de agosto

de 2022 y disponible en la página de internet
https://www.legisver.gob.mx/videosSesiones/SESIONES/VIDEO/LXVI_v02_082022se.mp4

5) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y

6) LA PRESUNCONAL LEGAL Y HUMANA.

Por lo antes expuesto, a Ustedes, CC. Ministras y Ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respetuosamente,

SOLICITO:

PRIMERO. Tener por presentada la demanda de acción de inconstitucionalidad, con la personería que ostento.

SEGUNDO. Admitir a trámite la presente demanda de acción de inconstitucionalidad en los términos que fue planteada.

TERCERO. Tener por designados como delegados a las personas indicadas al inicio de este escrito, así como por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos.

CUARTO. Conceder la suspensión solicitada en los términos del último apartado de esta demanda.

QUINTO. Admitir las pruebas ofrecidas en el capítulo correspondiente.

SEXTO. Se aplique la suplencia de la queja en nuestro favor.

SÉPTIMO. Previos trámites y en el momento procesal oportuno, declarar fundados los conceptos de invalidez y, por tanto, sea declarada la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave el **11 de agosto de 2022** y, a su vez, en su caso, se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas, por cuestión de efectos, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 CPEUM.

Sin otro particular, reitero a **Ustedes** la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

PROTESTO LO NECESARIO

Sergio Cadena Martínez
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática


015263

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 SEP 12 AM 8 58

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido por el buzón judicial el 10 de
Septiembre del presente año en 31 folios
con un nombramiento impreso a color en
1 folio, copia simple de credencial para
votar en 1 folio y 14 trocitos.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Escrito Inicial

Se Demanda PRD
NOMBRE DEL PROMOVENTE: Partido
de la Revolución Democrática
NÚMERO DE COPIAS: 19
NÚMERO DE ANEXOS: 2

FOLIO: 30662

b3941cfa56c735b5f8f96cfbeab07b67772ea30e60791cc40ea51a19e599a572

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Evidencia criptográfica.